
EMPRESARIOS Y POLÍTICOS EN LA DEMOCRACIA. DE LA CRISIS ECONÓMICA A LAS INCERTIDUMBRES DE LA TRANSICIÓN (*).

.....

MERCEDES CABRERA CALVO SOTELO

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Universidad Complutense de Madrid

CUANDO EN NOVIEMBRE DE 1975 MURIÓ EL JEFE DEL ESTADO, EL GENERAL FRANCISCO FRANCO, HUBO QUE AFRONTAR LAS INCERTIDUMBRES ABIERTAS TIEMPO ATRÁS. SE INICIÓ ENTONCES, AUNQUE NADA SE ENTENDERÍA SIN LO QUE VENÍA OCURRIENDO DESDE AL MENOS

51

quince años antes, la transición a la democracia. Hoy, veinticinco años después de que se aprobara la Constitución de 1978 y convertida España en un país «normal», sustancialmente distinto a aquél de un cuarto de siglo atrás, incorporada a Europa y a todos los foros internacionales, podría parecer que aquel tránsito iba de suyo, que no podía tener sino el desenlace que tuvo.

Y, sin embargo, fue un proceso políticamente complejo, de futuro contingente y que, al menos en sus inicios, atravesó situaciones muy delicadas. La transición y

consolidación de la democracia han sido objeto de múltiples tratamientos y análisis por parte de científicos sociales e historiadores, y sobre ella han escrito sus recuerdos y reflexiones muchos de sus protagonistas. Convertida incluso en modelo para otros países, que desde situaciones muy diferentes iniciaron más tarde sus transiciones, ocupa un lugar de honor en lo que ha dado en denominarse «transitología».

Como en los años treinta al proclamarse la Segunda República, la transición vino a coincidir con una crisis económica in-

ternacional. Al igual que entonces, las expectativas generadas por el cambio político y las dificultades derivadas de la crisis se entrecruzaron para desencadenar una conflictividad social en aumento, en la que se mezclaron las reivindicaciones económicas con las políticas, al tiempo que se iniciaba el proceso de institucionalización del nuevo régimen y la formación de un nuevo sistema de partidos políticos y organizaciones sociales.

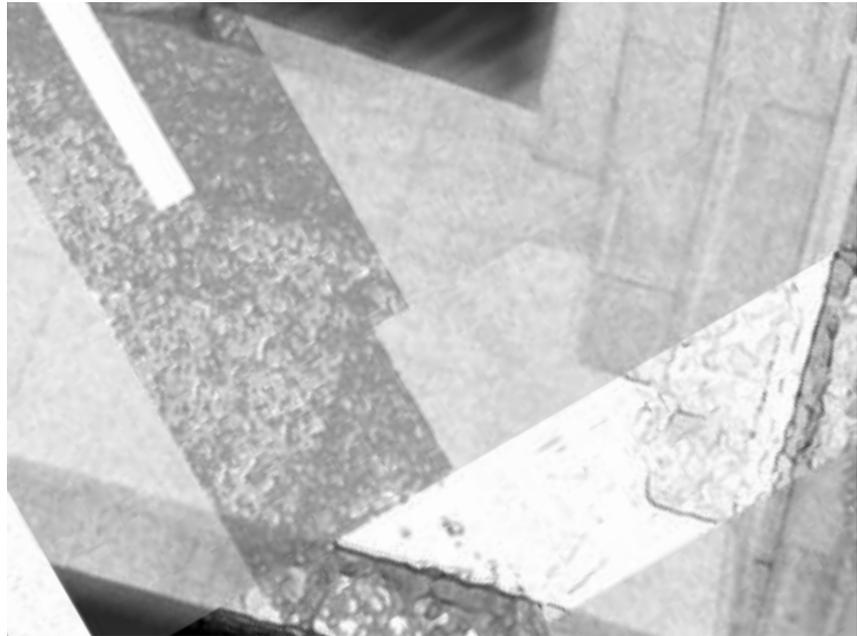
Pero, aunque sugerentes, ahí acaban los paralelismos, porque la sociedad y la

huelgas espectaculares, con unas organizaciones sindicales todavía ilegales que parecían ocupar el lugar de unos partidos políticos que no habían tenido aún ocasión de cuajar. Las horas de trabajo perdidas pasaron de 7 millones a 156 millones y, aunque bajaron a 110 millones en 1977, el número de huelguistas superó a los del año anterior (3.265.000). La economía española estaba instalada en una clara depresión, sin que la delicada situación política facilitara la adopción de medidas (3).

Se respiraba, además, un clima antiempresarial fomentado desde la izquierda en panfletos y pintadas que identificaban al empresariado con la dictadura franquista, y alimentado también por libros y folletos, más o menos académicos. Se proyectaba hacia atrás una condena en la que, convertidos los poderes económicos en *bloque oligárquico*, se les hacía responsables no ya del atraso del país, por haber procurado acogerse siempre a la protección del Estado, sino provocadores también de las graves quiebras políticas del pasado en su intento de mantener sus situaciones de privilegio.

A esa cultura antiempresarial, de hondas y plurales raíces en la sociedad española, se sumaba el hecho de que fueran escasas las voces que, entre la nueva clase política, se hicieran eco de sus problemas o acudieran en su defensa. Más bien se multiplicaban las propuestas de reformas sociales y se atendía más a la ofensiva reivindicativa del sindicalismo obrero que a la situación económica. No es de extrañar, por tanto, que, como demostraba una encuesta realizada entre ejecutivos de grandes empresas a finales de 1977, muchos opinaran que la economía española estaba al borde de una auténtica parálisis, pero al mismo tiempo dejaban traslucir una profunda desconfianza en su propio papel (4).

A esa situación y a ese clima vinieron a responder una serie de iniciativas empresariales que transcurrieron por vías distintas. Unas se encaminaron a la creación de foros de opinión y debate, y estuvieron patrocinadas fundamentalmente por núcleos de grandes empresarios y por la banca. La Asociación para el Estudio y Acción Empresarial, fundada por José



María López de Letona, cuyo nombre incluso había sonado como presidente de Gobierno tras la muerte de Franco, se convirtió, en mayo de 1977, en el Círculo de Empresarios bajo la presidencia de Santiago Foncillas, tras el nombramiento de López de Letona como gobernador del Banco de España.

Se proponía contrarrestar la imagen negativa del empresariado, divulgar la función que la empresa debía desarrollar en una sociedad basada en una economía de mercado como motor fundamental del progreso económico y social, y concienciar a la opinión pública del papel del empresariado en una sociedad libre y democrática. No pretendía ser una organización patronal ni un grupo de presión para la defensa de intereses específicos, sino un centro generador de «ideas» integrado por empresarios a título personal que, eso sí, pretendían trasladar esas ideas al conjunto del empresariado, a la opinión pública en general y, por supuesto también, a los órganos de decisión política: ministros, partidos políticos, administración y, desde que los hubo, parlamentarios.

Parecidos objetivos tuvo la Asociación de Estudios Empresariales, una entidad sin ánimo de lucro ni finalidad política, constituida por otro grupo de empresarios, muy vinculados a intereses bancarios, fi-

nancieros y eléctricos, aunque nunca pretendieron erigirse en defensores de un determinado sector, y que también creían en la utilidad social y la eficacia económica de la libre empresa. Su presidente fue Juan March Delgado, y en 1979 se convirtió en el Instituto de Estudios Económicos, cuyo primer director sería Víctor Mendoza Oliván (5).

Por importante que fuera agitar ideas y promocionar la imagen del empresariado era necesario también organizarse. Las iniciativas en este sentido surgieron a la vez dentro y fuera de la Organización Sindical. La Agrupación Empresarial Independiente, fundada por Max Mazín, Celso García, José Meliá y Bernardo Campos, celebró su asamblea constitutiva en diciembre de 1976, aunque los estatutos se retrasaron hasta abril de 1977, y se lanzó a una campaña en la prensa y a la captación de socios por diversas provincias.

La Confederación Empresarial Española (CEE), por su parte, fue fruto de una iniciativa de Agustín Rodríguez Sahagún y Joaquín Bardavío, quienes, en mayo de 1976, diseñaron un proyecto de servicio de estudios que ofrecieron a algunos bancos. La buena acogida por parte de éstos permitió convertir el proyecto de servicio de estudios en asociación. Menospreciada por quienes no la consideraban una organización con verdadero ori-

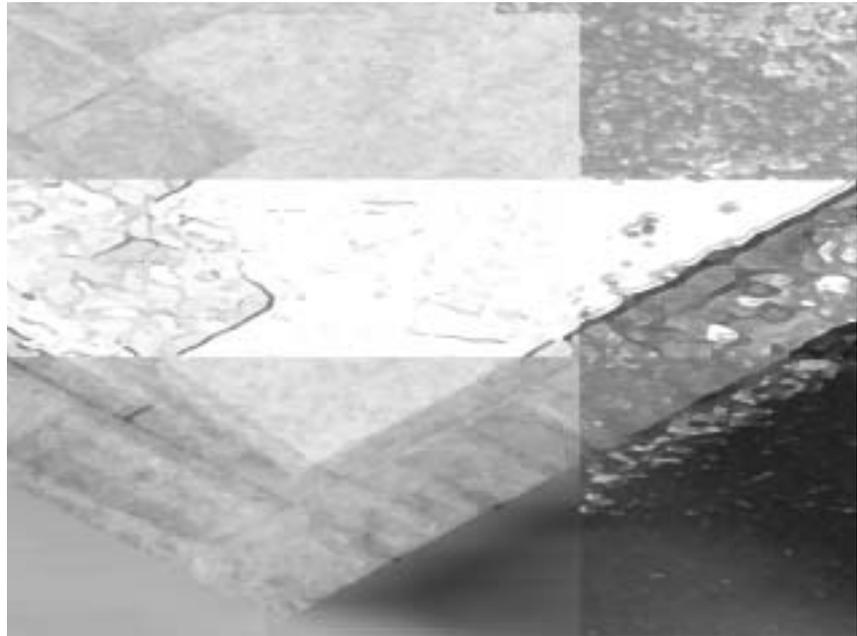
gestora y un comité delegado integrado por Ferrer Salat, Rodríguez Sahagún, Félix Mansilla y Max Mazín, cuya misión fue preparar la asamblea en la que se ratificarían los estatutos y se elegirían los cargos directivos. Fue un verano de duras negociaciones. Faltaban por incorporarse sectores económicos decisivos —como la construcción, industrias químicas, eléctricas y grandes almacenes—, y la clasificación de las organizaciones confederadas, el peso en votos en la futura asamblea y la elaboración de una candidatura, que finalmente fue cerrada, resultaron ser tareas complicadas.

La CEOE no era consecuencia de una cultura asociativa arraigada en el empresario español, sino de una reacción ante el clima de incertidumbre y de presión, y estaba todavía lejos de constituir una realidad verdaderamente representativa.

Las primeras elecciones generales habían dado el triunfo a la Unión de Centro Democrático (165 escaños), un partido casi recién creado por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en el que vinieron a confluír diversos grupos democristianos, liberales y socialdemócratas. El segundo lugar lo ocupó el Partido Socialista (118 escaños), mientras que la Alianza Popular que dirigía Manuel Fraga se quedó en 16 diputados y el Partido Comunista tampoco obtuvo los votos que muchos auguraban.

Aquellas Cortes convocadas como ordinarias tenían sin embargo que elaborar una Constitución, y para facilitar su debate convenía pacificar el ambiente, hacer frente de manera negociada y consensuada a la delicada situación económica y social. Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía y vicepresidente económico, procedió a una inmediata devaluación de la peseta y anunció un plan de urgencia para contener la inflación mediante una política de rentas y una política monetaria restrictiva, a cambio de la promesa de una reforma fiscal y un subsidio de desempleo, al tiempo que abrió conversaciones con los agentes sociales: sindicatos y organizaciones empresariales.

En la asamblea constituyente de la CEOE celebrada en septiembre, la candidatura



de Luis Olarra fue retirada, y salió triunfante la unitaria, encabezada por Carlos Ferrer Salat, más moderno y liberal, ajeno al viejo sindicalismo. Fue, sin embargo, enérgico en su actitud frente a los planes económicos del Gobierno: «Después de unos principios esperanzadores —dijo— vemos cómo las fuerzas políticas en vez de afrontar con urgencia y ánimo constructivo la solución de las graves cuestiones económicas y sociales que nos aquejan, se entretienen en temas secundarios y luchas internas y partidistas, mientras el país se degrada material y psicológicamente». Pocos días más tarde, en una reunión convocada por la Asociación para el Progreso de la Dirección, insistió Ferrer Salat en la «gravísima» situación por la que atravesaban los empresarios (9).

Las negociaciones abiertas por el ministro de Economía con los agentes sociales no pudieron vencer las reticencias de muchos, y los Pactos de la Moncloa fueron finalmente rubricados por los partidos y aprobados en las Cortes el 27 de octubre de 1977. La CEOE afirmó que no había participado en su elaboración, ya que no se sentía representada por ningún partido concreto, y anunció lo que iba a ser su caballo de batalla en los siguientes meses: la urgencia de afirmar el sistema de economía de mercado, que implicaba sobre todo la libertad de contratación y despido, y la atención al dete-

riorio del nivel de productividad. La reforma fiscal, necesaria, debía ser paralela a otra de la financiación de la Seguridad Social, planteadas ambas sobre bases realistas y sin dejarse llevar por planteamientos demagógicos.

Los dos vicepresidentes del Gobierno, Fuentes Quintana y Abril Martorell, aceptaron iniciar negociaciones con las centrales sindicales y las organizaciones empresariales acerca de los contenidos de la «problemática sindical» (acción sindical en la empresa, destino del patrimonio sindical, derecho de despido y huelga, y negociación colectiva) que no estaban contenidos en los Pactos de la Moncloa, y se formó un comité tripartito —Gobierno, sindicatos, patronal— para aplicar lo acordado (10).

A lo largo de los meses siguientes, la recién creada CEOE desplegó una importante actividad con el objetivo, por un lado, de asentarse y consolidarse como cúpula empresarial, y por otro, a la vez, de afirmarse como interlocutor ante los poderes públicos y las organizaciones sindicales. Una y otra cosa iban de la mano, y en ambas había que vencer resistencias. Para ello, se combinó una estrategia de movilización y agitación con una definición organizativa flexible a la hora de incorporar el heterogéneo abanico de entidades preexistentes, sectoriales unas,

territoriales otras, y también de las que podrían crearse en el futuro.

La estrategia de movilización y agitación adquirió en los primeros meses un aspecto poco frecuente, pues se basó en la celebración de asambleas multitudinarias de las que fue buena muestra la convocada por el Fomento del Trabajo Nacional en el Palau Blau Grana de Barcelona, que reunió a más de 10.000 empresarios el 28 de noviembre y en la que Ferrer Salat afirmó que estaba «en juego España, la empresa y nuestro propio futuro individual», poniendo especial empeño en atraerse a los pequeños y medianos empresarios, mayoritarios en el tejido empresarial español.

En Valencia, a comienzos de diciembre, fueron 3.500 los empresarios reunidos por la Confederación Empresarial Valenciana, y el presidente de la CEOE volvió a decir que «mientras en España no practiquemos plenamente la economía de mercado no podremos salir de la crisis». Como culminación del proceso, el 5 de febrero de 1977, más de 13.000 empresarios se concentraron en el Palacio de los Deportes de Madrid bajo los lemas de «Reaccionemos» y «Unidad, libre empresa y prosperidad» (11).

Eran voces que querían hacerse oír mientras se discutían los contenidos de la Constitución y proyectos como el de la Ley de acción sindical. En enero de 1978, en el Club Siglo XXI de Madrid, el presidente de la CEOE insistió en que la economía de mercado debía afirmarse sin confusiones en la Constitución, cosa que no ocurría en el proyecto conocido, y había que incorporar un estatuto de la empresa en el que se especificaran los derechos y obligaciones de la misma.

En el documento de la CEOE «Por una Constitución que garantice el progreso social y las libertades económicas» se declaraba inaceptable un país de economía planificada, tal y como se desprendía de lo previsto en algunos artículos de la Constitución. Qué podía esperarse de un país en el que la mitad de la gente se declaraba marxista y la otra mitad socialdemócrata, se preguntaba por entonces Ferrer Salat, y en el que los partidos políticos no respondían, como en otros paí-



ses europeos, al espacio político al que afirmaban adscribirse.

Esta actitud tan crítica se dirigía no tanto hacia los socialistas como hacia la UCD, un partido —pensaban muchos empresarios— que, pretendiéndose de derechas, parecía empeñado en llevar adelante una política de izquierdas. Durante una visita que realizó a Estados Unidos en abril, Ferrer Salat afirmó que el principio de libre empresa estaba a punto de sucumbir en España porque el proyecto de Ley de acción sindical que había presentado el ministro de Trabajo, Jiménez de Parga, significaba la anulación de la facultad directiva del empresariado. Finalmente, el proyecto fue desechado (12).

Al acercarse el mes de septiembre y con él la renovación de la directiva de la CEOE, circularon rumores sobre el apoyo gubernamental a una candidatura alternativa, «más presentable y dialogante», quizás la de López de Letona. Durante el verano, sin embargo, las relaciones se suavizaron y, en vísperas de la asamblea, todo pareció indicar que el Gobierno y la patronal habían suscrito un pacto de apoyo y colaboración. Ferrer Salat fue reelegido, salieron de la ejecutiva algunos «históricos», como Max Mazín y Luis Olarra, quien afirmó que había sido vetado por el Gobierno por sus críticas y su actitud combativa en las discusiones

del proyecto constitucional en el Senado. Se encargó la elaboración de un programa económico al economista Pedro Schwartz, se designó a José María Cuevas secretario general y se incorporó a la junta directiva, como miembro sin voto, Claudio Boada, en nombre del Círculo de Empresarios.

«Ser empresario es hoy muy difícil», declaró José Antonio Segurado, líder de la patronal madrileña y tesorero de la CEOE, y el mayor éxito de ésta había sido convencer a los empresarios de España de que continuaran siéndolo. No quiso Ferrer Salat responder a los periodistas sobre el cambio de actitud desde aquella asamblea en el Palacio de los Deportes, pero el vicepresidente Ignacio Briones dijo que se había buscado la profesionalización de la patronal y la adopción de decisiones acordes con lo que debía ser un sector empresarial moderno (13).



LA CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA

Aprobada la Constitución, y ante la nueva convocatoria electoral de 1979, la CEOE dirigió una carta a todos los empresarios llamándolos a aunar esfuerzos para exigirle al nuevo Gobierno que defendiera sin ambages el principio de libre empresa. La victoria de UCD fue, quizás, una desesperanzadora noticia para la patronal, pero cuando se anunció el programa económico del Gobierno, la patronal manifestó su apoyo en líneas generales. Suponía, en su opinión, una opción clara por la economía de mercado. El acuerdo no impidió, sin embargo, las matizaciones que quedaron plasmadas en un documento en el que no se ahorraban las críticas a la reforma fiscal del ministro Fernández Ordóñez o al nuevo marco de relaciones laborales.

Resultaba satisfactoria la voluntad anunciada de liberalizar la economía y suprimir intervencionismos, aunque la CEOE hacía hincapié en la necesidad de mantener la protección frente a los productos de terceros países, así como en el fomento del ahorro y la inversión privada, y en que la reducción del gasto público debía

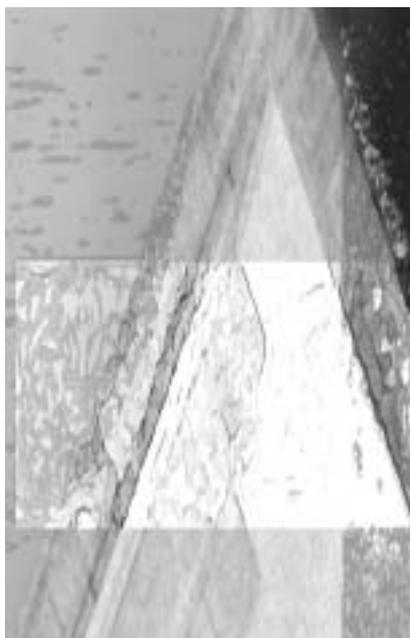
izquierdas ante la Audiencia Nacional, en el caso de las andaluzas. «La CEOE naciente creyó que debía velar sus armas contra el Gobierno de UCD», escribió más tarde Leopoldo Calvo Sotelo, varias veces ministro, y presidente de Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez.

En febrero de 1981, cuando se dirigía al Congreso de los Diputados a su sesión de investidura, la prensa diaria publicó una de las notas más duras de la historia de la confederación empresarial: los empresarios recriminaban a los políticos no haber sido capaces de crear el clima de confianza necesario para un buen desarrollo político y económico, y les conminaban a dejar de escudarse en las dificultades políticas de la transición, dando por concluido el confusiónismo que la había acompañado (16).

La apuesta por una «gran derecha» que algunos dirigentes empresariales auspiciaron fue un factor más —no el único, ni probablemente el decisivo— en la descomposición de UCD. Las elecciones de octubre de 1982 dieron una mayoría absoluta y entusiasta al Partido Socialista, triunfo contra el que los numerosos actos convocados por las organizaciones empresariales habían prevenido.

Sin embargo, no tardaron en producirse las primeras declaraciones de acatamiento de los resultados y de invitación al nuevo Gobierno para tender puentes de diálogo con los poderes económicos. Lo hizo Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. También Rafael Termes y Santiago Foncillas, presidente del Círculo de Empresarios. En realidad, habían sido varias las ocasiones, en los dos años anteriores, en las que los dirigentes de un PSOE renovado se habían reunido con los presidentes de los más importantes bancos, y habían cambiado impresiones en el Círculo de Empresarios. Ferrer Salat anunció que la actitud de la CEOE ante un Gobierno socialista sería de «apertura total al diálogo y colaboración constructiva», y Cuevas se manifestó a la espera de la concreción de las medidas anunciadas en el programa.

A diferencia de la actitud que había tenido la patronal francesa frente al Gobierno socialista de Mitterrand, y frente a la actitud de una minoría «obstruccionista», la



CEOE acordó conceder un período de gracia al nuevo Gobierno. Felipe González no tardó más de quince días en recibir, en compañía de Miguel Boyer, a Ferrer Salat, dedicándole cinco horas de atención. Fue el primero de una serie de contactos regulares prometidos entre el nuevo Gobierno y los empresarios (17).

Entre 1976 y 1981 habían desaparecido en España casi 50.000 empresas y 200.000 trabajadores independientes, mientras los costes salariales unitarios habrían crecido a un ritmo del 20% anual. Se había producido una verdadera «crisis de desindustrialización» que transformó y redimensionó radicalmente el sector y no se cerró hasta mediados de los años ochenta.

Para entonces se había cerrado también la mayor crisis atravesada en la historia por el sector bancario, que culminó en febrero de 1983, a los pocos meses de llegar los socialistas al poder, con la espectacular decisión de expropiar Rumasa. El mismo día en que se tomó tan discutida medida, Miguel Boyer llamó a Ferrer Salat y a Rafael Termes, cuya presencia al frente de la AEB estaba resultando decisiva, para garantizarles que los bancos y empresas de Rumasa serían inmediatamente privatizados.

Los socialistas, amparados en su mayoría parlamentaria y con Boyer al frente de la

política económica, abandonada toda veleidad nacionalizadora o planificadora, acometieron inmediatamente un plan de reajuste duro: devaluación, aumento de la presión fiscal mediante la implementación definitiva de la reforma, endurecimiento de la política monetaria y restricción del crédito, así como la repercusión gradual del aumento del precio del petróleo. No todos en el partido secundaban su política, y en 1985 Miguel Boyer dimitió de manera irrevocable.

La segunda mitad de la década estuvo marcada por los desafíos que al mundo empresarial y financiero les supuso el ingreso de España en la Comunidad Europea y la urgencia de afrontar la definitiva apertura y liberalización de la economía española. Pero fueron años esplendorosos, de crecimiento más que notable y de entrada de capitales extranjeros, atraídos por la estabilidad de la moneda, los altos tipos de interés y la elevada rentabilidad obtenida por las inversiones.

No deja de ser chocante que fuera con un Gobierno socialista cuando se rehabilitara la figura del empresario individual como creador de riqueza, y que entre los jóvenes se despertara la vocación empresarial. Fue entonces cuando el nuevo ministro de Economía, Carlos Solchaga, que había sustituido a Miguel Boyer, hizo una apelación al enriquecimiento, poniendo así su granito de arena en lo que comenzaba a llamarse la «cultura del pelotazo». «La frase me acompañará a la tumba», lamentó después Solchaga en una entrevista. La pronunció en una reunión con los miembros de la Asociación para el Progreso de la Dirección, en la que quiso convencer a los presentes de que la crisis económica había terminado definitivamente, y de que España se había convertido en un foco de atracción de capitales porque podía ganarse más dinero en menos tiempo.

No gustaban este tipo de declaraciones a José María Cuevas, convertido desde 1984 en presidente de la CEOE. Aquellos movimientos pendulares, desde el aborrecimiento a la adoración del dinero, pensaba Cuevas, podían acabar dinamitando la imagen del empresario al confundir «hacer dinero» con «hacer empresas». Porque una cosa era ser empresario y otra muy

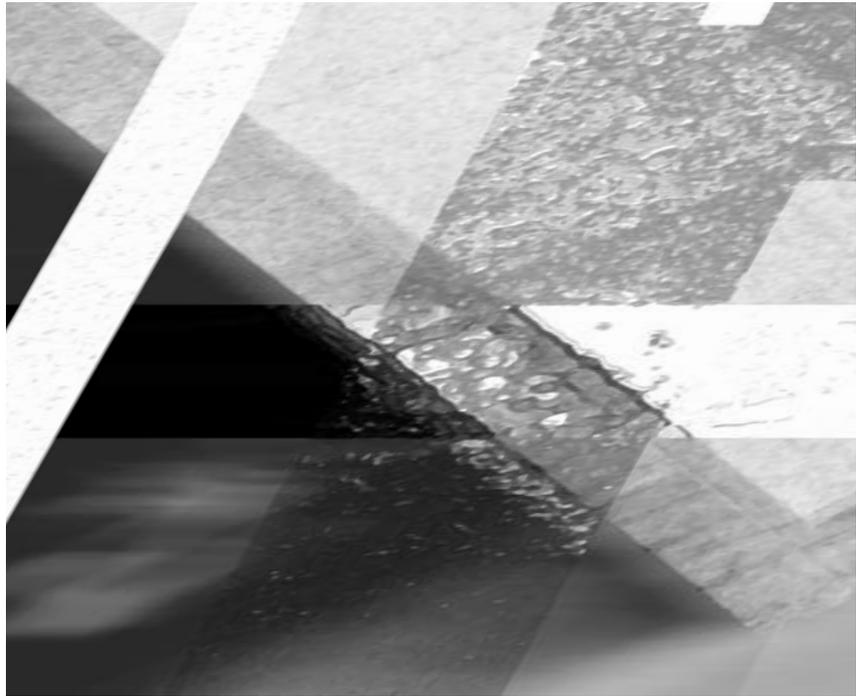
diferente hacer negocios y ganar dinero «traficando» o beneficiándose de informaciones privilegiadas (18).

La batalla empresarial de los primeros tiempos para legitimar la economía de mercado y su propio papel dentro de ella había pasado a la historia. Se había ganado y, a finales de la década de los ochenta, los problemas eran otros. El ciclo económico alcista de la economía mundial y el ingreso en la Comunidad Europea habían permitido el despegue del consumo y la inversión y el crecimiento de los excedentes empresariales. La tasa de paro bajó gracias a la flexibilización del mercado laboral y la expansión de la contratación temporal, pero la presión fiscal creció sin parar y también lo hizo el déficit público. El gasto público superaba cada año en más de un tercio al gasto presupuestado. La política monetaria se endureció y Carlos Solchaga insistió en la necesidad de contener las alzas salariales y flexibilizar aún más el mercado laboral.

Pero en el sindicato socialista se creía que, una vez superada la crisis, había llegado el momento de dejarse oír en la política económica, y las relaciones entre el Gobierno y el sindicato se deterioraron. La reforma del régimen de pensiones en mayo de 1985 había provocado ya duros enfrentamientos. Dos años más tarde, el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, abandonó su escaño y en el XXXI Congreso del PSOE se negó a ocupar la silla que le ofreció Felipe González en la ejecutiva.

La pérdida de posiciones de UGT frente a Comisiones Obreras en las elecciones sindicales de 1986 había llevado al sindicato socialista a pensar que su política de concertación y moderación conducía al fracaso. Decidió romper con ella y el 14 de diciembre de 1988, teniendo como detonante el plan de empleo juvenil, los dos sindicatos convocaron una huelga general que obtuvo un éxito rotundo.

Las grandes ciudades se paralizaron durante 24 horas, síntoma de que la protesta iba más allá. No era una huelga contra la patronal, sino contra el gobierno socialista, y así lo entendió la CEOE: había sido una huelga política. Nicolás Redondo



pensaba que algunos ministros socialistas habían sucumbido a los hechizos neoliberales y al «abrazo aristocrático» de las elites socioeconómicas. Carlos Solchaga quiso convencer a Felipe González de que convocara elecciones inmediatamente, pero le tocaba a España la presidencia europea y las elecciones se retrasaron hasta octubre de 1989. Por primera vez, UGT no llamó a votar a los socialistas. El PSOE volvió a ganar, pero perdió muchos votos (19).

Las medidas de carácter social —aumento en las prestaciones por desempleo, pensiones y otras ayudas— que el Gobierno se apresuró a tomar no fueron consideradas suficientes por los sindicatos, mientras que el «giro social», como había augurado el propio Solchaga, tuvo graves consecuencias al coincidir con el final del ciclo expansivo y el anuncio de una recesión propiciada por la guerra del Golfo, primero, y la unificación alemana, después.

En junio de 1989, la peseta entró muy sobrevaluada en el sistema monetario europeo y, dos años más tarde, España firmó el Tratado de Maastricht y con él el compromiso de cumplir con los criterios de convergencia. El «pacto social de progreso» suscrito con los agentes sociales fue

incumplido por el fracaso en la moderación salarial y el imparable crecimiento del déficit, y hubo que recurrir al «decretazo» para reducir la cobertura del desempleo. La nueva huelga general convocada por los sindicatos no tuvo esta vez el éxito de la anterior. Las «turbulencias monetarias» del sistema monetario europeo y el ataque a las monedas más débiles llevaron a tres devaluaciones sucesivas de la peseta.

El idilio de los socialistas con las fuerzas económicas había terminado. Dos años antes, a comienzos de 1992, se habían reunido en el Palacio de Congresos de Madrid más de tres mil empresarios. Los había convocado la CEOE para hablar de «la empresa española ante la nueva Europa». El acto fue inaugurado por el Rey, y José María Cuevas afirmó que la integración de España en Europa debía plantearse como una verdadera «cuestión de Estado».

El los seis años anteriores, dijo, los empresarios españoles habían llevado a cabo el mayor proceso de inversión y renovación que recordaba la historia reciente del país, pero los nuevos desafíos tenían singular trascendencia. Intervinieron también Carlos Ferrer Salat, varios ministros —Claudio Aranzadi, Carlos Solchaga,

«Patronos y obreros, presentes en el desarrollo del "Pacto de la Moncloa"», *El País*, 26 de octubre de 1977; «Los empresarios piden la implantación de la economía de mercado al mundo laboral», *El País*, 30 de octubre de 1977.

(11) «Diez mil empresarios critican la política económica del Gobierno», *El País*, 29 de noviembre de 1976; «Los empresarios atacan nuevamente al Gobierno», *El País*, 6 de diciembre de 1977; CEOE (1987), p. 14. Gutiérrez Álvarez (2001), pp. 326 ss.

(12) «La economía de mercado es la solución para la actual crisis», *El País*, 18 de enero de 1978; «Los empresarios, contra la planificación económica prevista en la Constitución», *El País*, 26 de enero de 1977.

(13) Enrique Barón. «Empresarios y democracia», *El País*, 4 de febrero de 1978.

(14) R. Pardo (1996).

(15) R. Pardo (1996). La organización interna de la CEOE, en los diversos trabajos incluidos en el número 22 de *Papeles de Economía Española*, Madrid, 1985.

(16) El hueco político para la CEOE, en Costas y Novell (1996). Calvo Sotelo (1996).

(17) «Un mitin, con la presencia de AP y UCD, cerrará la campaña de los empresarios en Madrid», *El País*, 21 de octubre de 1982; «Los empresarios han organizado 1.200 actos de crítica al programa socialista», *El País*, 24 de octubre de 1982; «El "nuevo lenguaje" de los socialistas y los empresarios», *El País*, 12 diciembre 1982.

(18) La rehabilitación de la figura del empresario, en Torrero Mañas (1988); Solchaga, en entrevista en *Memoria de la transición* (1995); las palabras de Cuevas, en Rivasés (1991), p. 508.

(19) Ruptura socialista y textos en torno a la huelga general, en Juliá (1989); testimonios de Solchaga y Redondo, en *Memoria de la transición...* (1995) y Burns (1996).

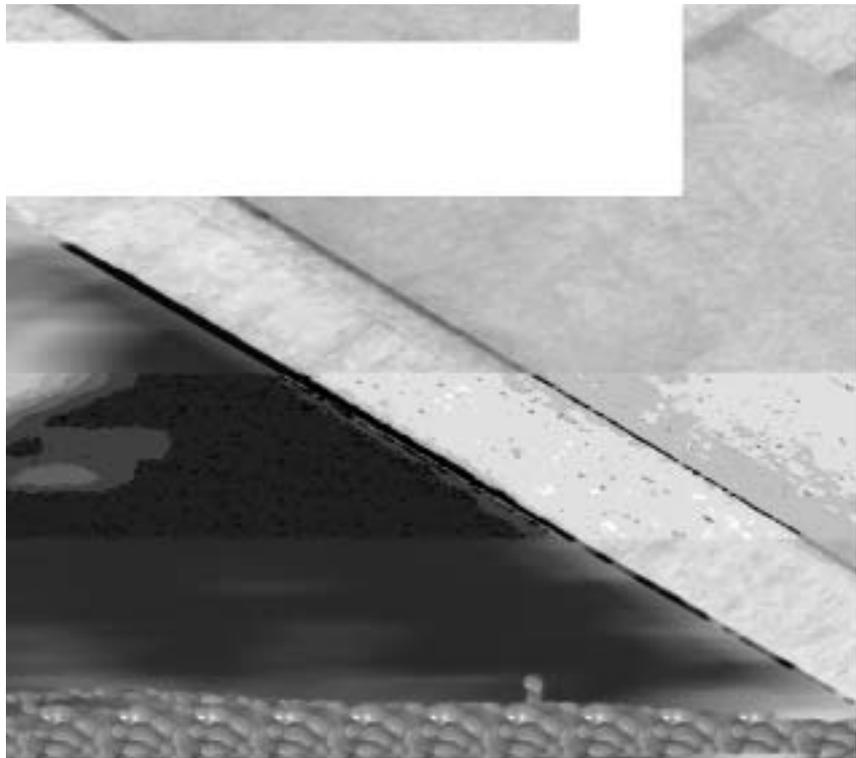
(20) La conferencia empresarial los días 30 y 31 de enero de 1992, en CEOE/CEPYME (1992); la cita de Aznar, en p. 41.

(21) El Círculo, en Rodríguez Braun (2002), pp. 129 ss.

(22) El aniversario del Círculo, en Rodríguez Braun (2002), p. 144.

•••••
BIBLIOGRAFÍA

BURNS MARAÑÓN, T. (1996): *Conversaciones sobre el socialismo*, Barcelona, Plaza y Janés.
 CABRERA, M. y DEL REY, F. (1996): «Los intereses económicos organizados en España. Un siglo en la historia del asociacionismo empresarial», en Comín, F. y Martín



Aceña, P. (eds.): *La empresa en la historia de España*, Madrid, Civitas, pp. 441-456.
 CABRERA, M. y DEL REY, F. (2001): «Los empresarios, los historiadores y la España del siglo XX», en Morales Moya, A. (coord.): *Las claves de la España del siglo XX. La modernización social*, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, pp. 291-313.
 CABRERA, M. y DEL REY REGUILLO, F. (2002): *El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000)*, Madrid, Taurus.
 CEOE (1987): *10 aniversario. 1977-1987. Diálogo y soluciones*, Madrid, CEOE.
 CEOE/CEPYME (1992): *Conferencia empresarial 1992. La empresa española en la nueva Europa. Intervenciones. 30 y 31 de enero*, Madrid, CEOE.
 CERCLE DE ECONOMIA (1983): *Cercle de Economia, 1958-1983. Una trajectòria de modernització i convivència*, Barcelona, L'Avenç.
 COSTAS COMESAÑA, A. y NOVELL, R. (1996): «Organización de los intereses económicos, función empresarial y política económica en España. El caso de la CEOE», en Comín, F. y Martín Aceña, P. (eds.): *La empresa en la historia de España*, Madrid, Civitas, pp. 457-471.
 GARCÍA FEMENÍA, A. M. (2002): *El asociacionismo empresarial en España*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Á. (2002): «La configuración del sistema asociativo empresarial en la transición a la democracia a través del caso sevillano», *Historia Social*, nº 44, pp. 21-36.
 GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, S. J. (2001): *Aproximación histórica a las organizaciones empresariales en España. II. Las organizaciones empresariales en la transición: 1975-1978*, Madrid, Fundación CEIM.
 JULIÁ, S. (ed.) (1989): *La desavenencia. Partidos, sindicatos y huelga general*, Madrid, El País-Aguilar.
 LINZ, J. J. (1988): «Política e intereses a lo largo de un siglo en España, 1880-1980», en Pérez Yruela, M. y Giner, S. (eds.): *El corporalismo en España*, Barcelona, Ariel, pp. 67-123.
 LINZ, J. J. y DE MIGUEL, A. (1964): *Los empresarios ante el poder público*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.
 MEMORIA DE LA TRANSICIÓN (1995): Madrid, El País.
 PARDO, R. (1996): «Organizaciones empresariales, sindicatos y relaciones industriales en el cambio de siglo», en Tusell J., Lamo de Espinosa E. y Pardo R. (eds.): *Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española*, Madrid, Alianza Editorial, Fundación BBVA, Fundación José Ortega y Gasset, pp. 469-518.
 PÉREZ DÍAZ, V. (1987): *El retorno de la sociedad civil*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos.

- PREGO, V. (1999): *Diccionario de la transición*, Barcelona, Plaza y Janés.
- PUIG RAPOSO, N. y CABRERA, M. (2000): «Carles Ferrer y Salat (1931-1998)», en Torres Villanueva, E. (dir.): *Los 100 empresarios españoles del siglo XX*, Madrid, LID, pp. 548-554.
- REDERO SAN ROMÁS, M. y PÉREZ DELGADO, T. (1994): «Sindicalismo y transición política en España», *Ayer*, nº 15, pp. 189-222.
- RIVASÉS, J. (1988): *Los banqueros del PSOE*, Barcelona, Ediciones B.
- RODRÍGUEZ BRAUN, C. (2002): *25 años del Círculo de Empresarios*, Madrid, Círculo de Empresarios.
- SOTO CARMONA, Á. (1996): «Conflictividad social y transición sindical», en Tusell, J. y Soto, Á. (eds.): *Historia de la transición, 1975-1986*, Madrid, Alianza, pp. 363-408.
- TORRERO MAÑAS, A. (1992): «Una nota sobre el empresariado en la economía española», en García Delgado (dir.): *España. Economía*, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 595-600.
- VIDAL FOLCH, X. (1990): «La patronal de la transició democràtica», *L'Avenç*, nº 138, pp. 66-73.